

## PROYECTO DE LEY

**Artículo 1º.-** Modifíquese el artículo 31 de la Ley 189, que quedará redactado de la siguiente manera:

**Artículo 31º - Secretarios/as. Deberes.** Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización judicial se imponen a los secretarios/as, sus funciones son:

1. Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los/las letrados/as respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados/as de distintas jurisdicciones.
2. Extender certificados, testimonios y copias de actas.
3. Conferir vistas y traslados.
4. Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al oficial primero o jefe de despacho, las providencias de mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo dispuesto en el Artículo 27, inc. 3. a);
5. Devolver los escritos presentados fuera de plazo.
6. Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos.
7. Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.
8. En los juicios de ejecución fiscal, dictar las siguientes disposiciones: a) que admitan tener por parte a los presentantes; b) requerir informes a entidades públicas y/o privadas; c) intimación de pago; d) citación para reconocer firmas de planes de facilidades; e) apertura a prueba de las excepciones y restantes cuestiones relacionadas con su producción; f) nulidad de actos procesales g) caducidad de instancia de oficio; h) medidas tendientes a asegurar el objeto del proceso.
9. Además de las facultades conferidas a los secretarios de primera instancia, los secretarios y prosecretarios letrados de cámara cuentan con la atribución de instruir las causas concernientes a los recursos directos de conformidad con las instrucciones que les imparte el presidente de la Sala.

Dentro del plazo de tres días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo dispuesto por el Secretario/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución dictada por el juez/a es inapelable, salvo que se trate de disposiciones del Secretario/a en uso de las facultades previstas en los apartados f), g) y h) del inciso 8º) de este artículo, las que serán apelables siempre que se verifique el cumplimiento de los restantes requisitos de procedencia establecidos en este Código.

**Artículo 2.-** Modifíquese el artículo 216 de la Ley 189, que quedará redactado de la siguiente manera:

**Artículo 216º - Procedencia.** El recurso de aclaratoria procede contra las sentencias, las disposiciones del/la Secretario/a y las providencias simples, a fin de que el Tribunal o en su caso el/la Secretario/a que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión; de conformidad con lo prescrito en el Artículo 149 inc. 2º.

**Artículo 3. –** Modifíquese el artículo 218º, de la Ley 189, que quedará redactado de la siguiente manera:

**Artículo 218° - Resolución.** El Tribunal o, en su caso, el Secretario/a dicta resolución dentro de los tres (3) días de interpuesto el recurso si es escrito, y en el mismo acto en el supuesto de una audiencia. La resolución corrige cualquier error material, aclara algún concepto oscuro, suple cualquier omisión en que hubiese incurrido y no altera en lo sustancial la decisión recurrida.

**Artículo 4.-** Modifíquese el artículo 450, de la Ley 189, que quedará redactado de la siguiente manera:

**Artículo 450° - Supuestos comprendidos.** El cobro judicial de todo tributo, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones y de las multas ejecutoriadas, que determinen las autoridades administrativas, se hace por vía de ejecución fiscal establecida en este código, sirviendo de suficiente título, a tal efecto, la boleta de deuda expedida por la Dirección General de Rentas y Empadronamientos, organismo equivalente o por la autoridad que aplique la multa.  
El/la Secretario/a analiza en forma preliminar las condiciones del título y en su caso, ordena la intimación de pago

**Artículo 5.-** Modifíquese el artículo 451 de la Ley 189, que quedará redactado de la siguiente manera:

**Artículo 451° - Intimación de pago. Excepciones.** En la ejecución fiscal, si el/la ejecutado/a no abonara en el acto de intimársele el pago, queda desde ese momento citado de venta, en el plazo de cinco días debe oponer las excepciones a que se crea con derecho. Las únicas excepciones admisibles las siguientes:

1. Falta de personería en el/la demandante, o sus representantes;
2. Espera documentada;
3. Litis pendencia, en otro tribunal competente;
4. Falta de legitimación pasiva en el/la ejecutado/a para obrar;
5. Pago, total o parcial, o cualquier otro modo de extinción de las obligaciones, documentado mediante constancia expedida por la autoridad administrativa o entidad pública o privada autorizada a percibir el tributo en su nombre, o cuando se haya expedido, por autoridad competente, una certificación de inexistencia de deuda que comprenda el período reclamado;
6. Falsedad o inhabilidad de título basada exclusivamente en vicios de forma de la boleta de deuda;
7. Prescripción;
8. Cosa juzgada.

**Artículo 5.-** Modifíquese el artículo 453°, de la Ley 189, que quedará redactado de la siguiente manera:

**Artículo 453° - Trámite de las excepciones.** El Tribunal desestima sin sustanciación alguna las excepciones que no sean de las autorizadas por la ley, o que no se hayan opuesto en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el/la ejecutado/a les hubiese dado. En ese mismo acto el Tribunal dicta sentencia de remate De las excepciones opuestas y documentación acompañada se da traslado con copias por cinco (5) días al ejecutante, debiendo el auto que así lo dispone notificarse personalmente o por cédula.

Al contestar el traslado el ejecutante tiene la carga de ofrecer la prueba de que intente valerse

**Artículo 6.-** Modifíquese el artículo 455, de la Ley 189, que quedará redactado de la siguiente manera:

**Artículo 455° - Prueba.** Cuando se hubiere ofrecido prueba que no consistiese en constancias del expediente, el/la Secretario/a acuerda un plazo común para producirla, tomando en consideración las circunstancias y el lugar donde deba diligenciarse.

Corresponde al/la ejecutado/a la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones.

El/la secretario/a, por disposición fundada, desestima la prueba manifiestamente inadmisibile, meramente dilatoria o carente de utilidad. Pero ello no obsta al ejercicio de las facultades conferidas al Tribunal en los arts. 29 y concordantes de este Código.

Se aplican supletoriamente las normas que rigen la prueba, en lo pertinente.

**Artículo 7.-** Comuníquese, etc.

## **FUNDAMENTOS**

Señor Presidente:

El Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 189) actualmente en vigencia en ésta Ciudad fue sancionado el 13 de mayo de 1999 (Publicación B.O. 28-VI-99) y empezó a regir a partir de los sesenta días de ésta última fecha. Este Código fue el primero que instituyó el procedimiento a seguir en los nuevos Juzgados.-

El objeto de la presente reforma gira en torno al mejoramiento del servicio de justicia. El factor tiempo en la resolución de las controversias es primordial, pues la oportunidad es uno de los elementos esenciales para determinar el grado de eficacia de los tribunales. Hay que tener en cuenta que para que la justicia sea injusta no hace falta que se equivoque, basta que no juzgue cuando debe juzgar. Y esto a veces ocurre hoy en nuestros Tribunales.-

En la actualidad en los Juzgados Contenciosos Administrativos tramitan alrededor de cuarenta mil (40.000) juicios en cada uno de los Juzgados. En el año 2003 se iniciaron noventa mil trescientos ocho (90.308) juicios lo que arroja un promedio de 7.525 expedientes por juzgado (conf. nota dirigida por el Consejo de la Magistratura a la Sra. Secretaria de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Lic. Marta Albamonte con fecha 6 de agosto de 2004).

Esta situación conducirá, en poco tiempo lamentablemente, a ese retardo que provocaría una denegación de justicia. Por tanto creemos necesario tomar una determinación tendiente al mejor funcionamiento del Sistema Judicial. La propuesta se refiere a lograr una mejor prestación del servicio de justicia, a través del fortalecimiento del rol de los Secretarios. Es necesaria la superación del modelo organizacional actual, el cual gira en torno de una fe pública a menudo ficticia. Y esta

propuesta de reforma resultará propicia para fortalecer el proceso de cambio que necesita la Justicia Argentina a un mínimo costo.-

Ya se viene discutiendo como mejorar este servicio de justicia. En este sentido, en el Plan Nacional de Reforma Judicial, se sostuvo la conveniencia de jerarquizar a los actuarios mediante su promoción al cargo de juez o fiscal, para así mejorar el desempeño de nuestra Justicia solucionando su déficit de juzgadores, a un mínimo costo (GARAVANO, Germán C. (Director - Coordinador), *"Plan Nacional de Reforma Judicial"*, Ministerio de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, Nueva Justicia Siglo XXI, Propuestas para la Reforma del Sistema de Justicia, 1998, Capítulo 3. En línea, <http://www.reforma judicial.jus.gov.ar> ).

Asimismo, en el Proyecto PNUD se señaló la necesidad de hacer posible el mejor desempeño del Secretario, mediante el aumento de sus competencias procesales, facultades impulsorias, resolutorias en el orden procesal, y en materia de ejecución, previéndose la instauración de un sistema de sustitución de los Secretarios, de carácter análogo al establecido para los magistrados (PALMA, Luis María (Autor - Coordinador), *"Una Propuesta para la Justicia del Siglo XXI"*, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, marzo de 2000, Capítulo 3, p. 166. En línea, <http://www.reformajudicial.jus.gov.ar> ).-

En este contexto constituye un sentir unánime mejorar la Justicia de la Ciudad de Buenos a los fines de que los ciudadanos obtengan en el menor tiempo posible una decisión a su conflicto.-

En virtud de ello es necesario, y perfectamente asumible, la ampliación de funciones de los Secretarios Judiciales en los procesos de ejecución fiscal, reservando a los Magistrados la función decisoria.

Esto resolvería gran parte del atasco permanentemente denunciado por los profesionales del Derecho, traducido en las dilaciones indebidas en muchos casos, para permitir de este modo al Juez centrarse en la altísima potestad que la Constitución le encomienda, cual es la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, resolviendo el conflicto que se somete a su jurisdicción.-

El eje central de la reforma que se propicia se encuentra en la figura del Secretario Judicial convirtiéndose en una de las claves de la misma. Es que, como se observa, no sólo se definen con mayor precisión sus funciones, sino que se le atribuyen otras, potenciando así sus capacidades profesionales.- Es importante destacar que, en número, los Secretarios son el doble que los jueces, por tanto las nuevas tareas asignadas, se distribuirían entre más personas. Se evitaría sí el "cuello de botella" que se provoca en la firma del Magistrado.

Es que la figura del Secretario Judicial se encuentra un tanto desaprovechada, pues es un operador jurídico altamente cualificado, verdadero experto en Derecho Procesal y que, ha superado un concurso público de oposición y antecedentes similar a Jueces y Fiscales de conformidad con lo que expresamente establece la Constitución Local. Sin perjuicio de ello y en la práctica forense nos encontramos con una descompensación en lo que a reparto de trabajo se refiere entre Jueces y Secretarios.-

Está claro que no pueden ser asignadas a los Secretarios Judiciales tareas que comporten ejercicio de la potestad jurisdiccional, dado que está exclusivamente asignada a los Jueces, sin embargo como se propone en esta reforma, hay otras muchas funciones que hoy por hoy desempeñan los Magistrados, que por su carácter no jurisdiccional perfectamente podrían y deberían ser desempeñadas por los Secretarios Judiciales.-

Estas descompensaciones pretenden ser corregidas en la medida de lo posible por esta reforma que se propone.-

Como se observa, la reforma al art. 31 del Código aprobado por la ley 189, encomienda al Secretario Judicial la dirección en el aspecto "técnico procesal" en materia de ejecución fiscal.-

Es evidente que los Juzgados necesitan de una profunda reforma que la adapte a los nuevos tiempos en que nos encontramos, dado que se ha quedado anquilosada en el pasado. Su funcionamiento, organización, composición, distribución de medios materiales y personales etc, fueron verdaderamente adecuados para una época ya pasada, pero no responden a las exigencias de la sociedad actual.-

Los jueces se encuentran sobrecargados en sus funciones de acuerdo al actual ley nº 189. Al lado del Juez se encuentra el Secretario Judicial, que como ya se expresara es un profesional altamente cualificado y altamente "desaprovechado" y huérfano de funciones; por lo que es fácilmente deducible que esta situación podría solventarse vaciando al Juez de todas aquellas funciones que no fuesen estrictamente jurisdiccionales a costa de encomendárselas al Secretario Judicial, con lo que se produciría una racionalización más adecuada de funciones y se potenciaría en su justa medida a los funcionarios judiciales.-

Vista la situación descripta, se comprende la necesidad de una reforma que sirva para modernizar, racionalizar, actualizar y organizar de una manera eficaz la Administración de Justicia de nuestros días en la Ciudad de Buenos Aires y el primer paso está dado por lo que se propone que determina claramente el rol del Secretario Judicial mediante su jerarquización, redundando en una mayor inmediatez a escaso costo, pues con sólo prever una menor diferencia entre actuarios y jueces, sería posible aumentar la eficiencia.-

No sólo es cuestión de trabajar más, sino mejor y al servicio de los ciudadanos de ésta Ciudad.-

La propuesta, Sr. Presidente, con distintas particularidades, ya es derecho vigente en nuestro país y en España. Así el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta (Ley 5233), ha agregado una cantidad importante de funciones a los Secretarios judiciales, principalmente en materia de juicios ejecutivos, pero también en los procesos en general.

En España, a los Secretarios Judiciales se le han asignado las siguientes funciones referidas al Impulso procesal (Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre de ese año), Les corresponde impulsar el procedimiento en los términos que establecen las leyes procesales. A tal fin, dictarán las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso,

salvo aquellas que las leyes procesales reserven a Jueces o Tribunales. Estas resoluciones se denominan diligencias, que podrán ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución. Las diligencias de ordenación serán recurribles ante el Juez o el Magistrado Ponente, en los casos y formas previstos en las leyes procesales. Se llamará decreto a la resolución que dicte el Secretario Judicial con el fin de poner término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión. Será siempre motivado y contendrá, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa. Los Secretarios Judiciales, cuando así lo prevean las leyes procesales, tendrán competencias en las siguientes materias: 1). La ejecución salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados. 2) Jurisdicción voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer. 3). Conciliaciones, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia. 4). Cualesquiera otras que expresamente se prevean.

Se trata entonces, de aplicar en nuestra Ciudad Autónoma, adaptándola a las circunstancias del caso, una Legislación que ya ha sido dictada en otros ordenamientos y que reconoce a los Secretarios Judiciales, muchas funciones que hoy realizan aunque no estén expresamente previstas en la legislación y otras nuevas que permitan un mejor funcionamiento de los Juzgados.

Quiero agradecer la colaboración de los Dres. Pablo De Giovanni, Darío Reynoso, Juan Manuel Converset, Martín Farrel, Soledad Larrea, Aurelio Amiratto, Verónica Franceschi, Andrea Danas, todos ellos Secretarios de Primera Instancia de la Justicia Contencioso Administrativa de la Ciudad.

Por los motivos expuestos, solicito de mis pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.